

# ARGENTINA AL FINAL DE LA GUERRA FRÍA. LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN

*Argentina at the end of the Cold War. The foreign policy of the government of Raúl Alfonsín*

Cristián Fuentes Vera<sup>1</sup>  
Universidad Central de Chile  
Santiago, Chile  
crfuentes47@gmail.com

Vol. XII, n° 20, 2014, 31-50  
Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2013  
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2014  
Versión final: 7 de julio de 2014

RESUMEN. La derrota en la guerra de las Malvinas, en 1982, permite que Argentina retorne a la democracia. Hasta ese momento, el país se encontraba bajo la dictadura militar que había depuesto a la presidenta María Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976. Argentina perteneció primero a la esfera de influencia inglesa y después a la norteamericana, situación que durante la guerra fría trajo consigo la lucha anti insurgente y la doctrina de seguridad

---

<sup>1</sup> El autor es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad Central de Chile. Es Magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctorando en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales, del Instituto IDEA (Universidad de Santiago de Chile). Además, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como Analista de la Dirección de Planificación y como Director de Coordinación Regional. Se ha desempeñado como profesor en las Universidades de Chile, Alberto Hurtado, Viña del Mar y de Santiago. Su última publicación es el artículo de 2012: "El regionalismo abierto en la política exterior chilena ¿versión original o concepto equívoco?". *Revista Enfoques*, vol. X, n° 17, Santiago.

nacional, mezclándose con la persecución a los partidarios del general Juan Domingo Perón. La intensa relación comercial del régimen de las Fuerzas Armadas con la Unión Soviética, no alteró su pertenencia al bloque occidental, hasta que el intento de los militares por recuperar las Malvinas recibió el rechazo del sistema de seguridad hemisférica, pues Washington prefirió al Reino Unido como su aliado estratégico. En este contexto, la nueva administración democrática del presidente Raúl Alfonsín, planteó una reinserción internacional desde la autonomía y el no alineamiento, política que fracasó debido a la imposibilidad de conseguir mejores condiciones para pagar la deuda externa y a que en la fase final de la guerra fría, el bloque socialista dejó de ser un factor de equilibrio del poder mundial.

*Palabras clave:* condicionamientos internos y externos de la política exterior, fase final de la guerra fría, autonomía, alineamiento, deuda externa

ABSTRACT. The defeat in the Falklands War in 1982 allows Argentina to return to democracy. Until then, the country was under the military dictatorship that had deposed President Maria Estela Martinez de Peron in March 1976. Argentina belonged first to the British sphere of influence and then to the U.S. situation during the Cold War brought anti insurgent struggle with it and the Doctrine of national Security, mingling with the persecution of supporters of Gen. Juan Domingo Peron. The intense trade relationship the military regime in the Soviet Union did not alter the Western bloc membership until the military attempt to recover the Malvinas received rejection hemispheric security system, since Washington chose the UK as its strategic ally. In this context, the new democratic administration of President Raúl Alfonsín raised an international reintegration from autonomy and the non-alignment policy that failed due to the inability to secure better terms to repay foreign debt and in the final phase of the war cold, the socialist bloc ceased to be a factor of balance of world power.

*Keywords:* internal and external conditionalities of foreign policy, the final phase of the Cold War, autonomy, alignment, external debt

## Introducción

La derrota en la guerra de las Malvinas, en 1982, abre la posibilidad de volver a la democracia en Argentina. Hasta ese momento, el país se encontraba bajo una dictadura militar (conocida como “Proceso de Reorganización Nacional”), que había depuesto al gobierno de la presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón (“Isabelita”), en marzo de 1976.

Las Fuerzas Armadas intervinieron en la política argentina desde 1930, para decidir la disputa por el poder en un escenario que se caracterizaba por la ausencia

de una fuerza civil representativa de los sectores dominantes. Por esa razón, los militares se habían convertido en el “partido del orden”, primero como los guardianes de los intereses de los sectores agrarios afectados por el yrigoyenismo (doctrina formulada por el presidente radical Hipólito Yrigoyen), y luego por el peronismo triunfante (convertido en Partido Justicialista), ambos disconformes con el tipo de inserción que se le había asignado al país en la esfera de influencia inglesa y después norteamericana.

La guerra fría trajo consigo el adoctrinamiento militar en la lucha antisubversiva, mezclándose el combate al comunismo con el enfrentamiento con los partidarios del general Juan Domingo Perón, proscritos desde su derrocamiento en 1955. Precisamente, una particularidad argentina es la radicalización de un sector del peronismo, que se hace seguidor de los principios y métodos de la Revolución cubana, confundiendo la lucha entre proyectos globales con las tendencias identitarias nacional-populares locales.

El regreso del viejo general trajo consigo un período muy breve en que importantes autoridades eran favorables a la izquierda, ya que los militares entregaron el Poder Ejecutivo a Héctor J. Cámpora, quien había ganado las elecciones de 1973, en remplazo de Perón, el que no pudo legalmente ser candidato. Junto a Cámpora resultaron electos varios mandatarios provinciales y municipales, así como un número apreciable de parlamentarios de esa tendencia. Además, fueron nominados un alto mando de las Fuerzas Armadas leal con el nuevo gobierno, sobre todo el del Ejército, y un número apreciable de funcionarios de la administración pública.

Pero la situación no tardaría en cambiar, pues la orientación que el oficialismo quería imponer provocó la reacción no solo de la oposición, sino de una parte significativa del propio justicialismo. De tal modo, el general Perón ordenó la renuncia de su fiel delegado y se convocó a elecciones, donde una contundente mayoría lo llevó por tercera vez a la Casa Rosada, aunque pronto las divisiones entre sus seguidores escalaron hasta convertirse en un conflicto abierto, que derivó en la ruptura y la represión.

A la muerte de Juan Domingo Perón, en 1974, le substituyó su viuda y vicepresidenta. Isabelita se rodeó de quienes pretendían aplastar desde la ultraderecha y el sindicalismo aliado a sus enemigos internos, al frente de los cuales se encontraba el antiguo mayordomo del general y ahora ministro de Bienestar Social, José López Rega, organizador de la Alianza Anticomunista Argentina (más conocida como la triple A).

Este grupo terrorista se encargaba de ejecutar a los militantes de Montoneros (peronistas de izquierda), del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT) y de su orgánica militar (ERP o Ejército Revolucionario del Pueblo), de orientación marxista-leninista-trotskista, así como a los defensores de los derechos humanos y a cualquier dirigente que fuera identificado como cercano a dichos sectores.

La verdad es que pese a la fuerza que logró tener, mucho más relevante en la dimensión político-social que en la militar, la izquierda argentina nunca puso en riesgo la pertenencia del país al bloque capitalista en la guerra fría. Más bien,

su disputa con Perón y el uso de las armas la aisló de la mayoría ciudadana, lo que junto a los errores económicos, la corrupción y la falta de liderazgo de la presidenta, agravada por el influjo de López Rega, terminaron por decidir a los institutos castrenses a realizar un golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976.

A pesar de una violencia represiva que llegó a excesos inéditos en la historia no solo de Argentina, sino que del mundo entero, la “guerra sucia” desatada por la dictadura concitó solo una condena de menor intensidad por parte del gobierno norteamericano, sobre todo de la administración de Jimmy Carter, en comparación con otros regímenes autoritarios como el de Augusto Pinochet en Chile.

Así lo indica un documento que resume la reunión realizada entre el secretario de Estado, Henry Kissinger, y personal de alto nivel de su repartición, el 26 de marzo de 1976 (dos días después del golpe). En esta ocasión, el secretario asistente para Asuntos Hemisféricos, William Rogers, informó que los generales argentinos harían “un esfuerzo considerable para implicar a los Estados Unidos, particularmente en el plano financiero”, respondiendo Kissinger que “eso está dentro de nuestros intereses”. No obstante, Rogers explica que los Estados Unidos se encontraban en una posición delicada para transmitir su apoyo y al mismo tiempo cuidar la imagen, puesto que aunque la opinión pública argentina e internacional consideraban muy moderado el golpe militar, “es de esperar una cantidad substancial de represión, probablemente mucha cantidad de sangre en Argentina muy pronto, no solo contra los terroristas sino contra los disidentes de los sindicatos y sus partidos”. El secretario de Estado pregunta: “¿Qué significa esto en concreto? Si van a tener alguna oportunidad, van a necesitar ser alentados de nuestra parte... porque yo quiero alentarles. No quiero hacerles sentir que están siendo hostigados por los Estados Unidos” (FOIA, 2006).

La desclasificación de 4.677 documentos de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en Argentina entre 1975 y 1984, demuestran lo mismo. Los más altos funcionarios estadounidenses aconsejaron a la dictadura argentina que terminara rápidamente con la represión ilegal a fin de evitar críticas en el Congreso. “Nuestra actitud básica es que estamos interesados en que tengan éxito”, dijo el secretario de Estado Henry Kissinger al canciller argentino César Guzzetti en octubre de 1976. “Cuánto más rápido tengan éxito, mejor” (Arnson y Taraciuk, 2004).

Por un lado, Washington tenía un discurso de promoción de los valores democráticos y de apoyo a los derechos humanos, pero por el otro las distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos defendían sus intereses tradicionales. Sin embargo, las posiciones no fueron monolíticas y “la verdad histórica es mucho más compleja” (Dinges, 2004: 13).

Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, tuvo varias reuniones con el canciller argentino, almirante César Guzzetti, y con el presidente, general Jorge Rafael Videla, donde les hizo ver que su gobierno se oponía a las violaciones a los derechos humanos. Hill entendió que los militares argentinos ignoraban sus protestas porque Kissinger se había reunido secretamente con Guzzetti y lo había tranquilizado sobre dicho tema. En julio de 1976, Kissinger dio

un discurso sobre la importancia de los derechos humanos frente a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Santiago de Chile. Era la primera vez que los derechos humanos aparecían como una prioridad para Estados Unidos, aunque fue tomada en serio por muchos diplomáticos norteamericanos, tales como el propio Hill, “quien había ganado su puesto por su servicio al Partido Republicano en la época de Nixon”. Argentina debía proseguir con intensidad la guerra contra el terrorismo para terminarla rápidamente. Kissinger creía que se podrían evitar serias complicaciones si el “problema terrorista está finalizado en diciembre o enero”. Luego de saber de las reuniones de Guzzetti con Kissinger, Hill se enfureció e informó a Washington criticando a Kissinger por haber sido el causante de las dificultades y descartó que la misión continuara presentando declaraciones al gobierno militar sobre violaciones de derechos humanos (Dinges, 2004: 16 y 18).

Más tarde, la administración Carter se mostró decididamente contraria a las violaciones de los derechos humanos en Argentina, cortando la ayuda militar a la mitad y aplicando sanciones económicas (Osorio, 2004: 21). No obstante, el Pentágono y la CIA tenían órdenes de cooperar en este tema (Documento, 4 de mayo de 1977).

Asimismo, desde la presidencia de Gerald Ford había habido una alianza estratégica con los militares considerados “moderados”, pero fue necesario que este acuerdo se reacomodara cuando se inició el gobierno de Carter. En esa época se enviaron helicópteros y municiones en pequeña cantidad, y con mucho riesgo porque si el Congreso norteamericano se hubiera enterado, la administración de Carter habría tenido problemas. Esta política continuó hasta septiembre de 1978, cuando el gobierno argentino y el vicepresidente Walter Mondale acordaron que Buenos Aires permitiría la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cambio de que Estados Unidos aprobara la salida de fondos del Banco Export-Import (destinados al proyecto hidroeléctrico de Yacretá) y que quitara el embargo a las ventas comerciales y militares (Osorio, 2004: 23).

Existía una presión muy intensa, pues Washington había perdido cerca de 4.000 millones de dólares por las sanciones impuestas al gobierno argentino, monto que incluía 3.000 millones de dólares en ganancias potenciales de los préstamos que les habrían permitido obtener determinados contratos, y cerca de 1.000 millones de dólares en préstamos directos y venta de armamentos (Osorio, 2004: 24).

En todo caso, las exportaciones agropecuarias, básicamente de cereales, hacia la Unión Soviética (URSS), aumentaron significativamente en este período, razón por la que aunque se mantuvo inalterable el alineamiento con Estados Unidos, muestra de lo cual fue la cooperación militar anti insurgente en América Central, la distensión con el bloque socialista conformó una vertiente pragmática, con la sola excepción de Cuba, debido al sustento que la isla daba a los movimientos guerrilleros argentinos.

El conflicto entre las distintas tendencias al interior de la dictadura, principalmente del Ejército, institución a la que le correspondía el Poder Ejecutivo, y

las dificultades económicas causadas por una política neoliberal que no acertaba a cambiar con éxito la esencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), estimularon la protesta social, encabezada por el sindicalismo, situación que alentó la aventura de la invasión a las islas Malvinas, cuya reconquista por parte del Reino Unido provocó el fin del régimen militar.

Tal episodio demostró que el sistema de seguridad hemisférica construido en la post Segunda Guerra Mundial, funcionaba en la lógica exclusiva de la amenaza comunista, careciendo de sentido cuando la potencia extracontinental que atacaba a un país de la zona era una estrecha aliada de Washington.

En efecto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) no fue activado como mecanismo de defensa colectiva y la Organización de Estados Americanos (OEA) se limitó a ser un foro donde se expresaban las posiciones y un marco para realizar gestiones de paz. En la práctica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) era la alianza que prevalecía en esta parte del mundo y Gran Bretaña compartía los intereses más relevantes para Estados Unidos, siendo Argentina nada más que un detalle en el tablero de la lucha por la hegemonía planetaria en el escenario de la guerra fría.

Una serie de documentos desclasificados, pertenecientes a la Presidencia, al Departamento de Estado y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), revelan los detalles de la participación de Estados Unidos durante la guerra de las Malvinas. Entre estas informaciones, se encuentran aquellas relativas a que Washington no quería herir a Margaret Thatcher y perjudicar sus posibilidades políticas.

Por ello, Ronald Reagan pretendía insistir en una presencia multinacional y lograr que el general Leopoldo Fortunato Galtieri (presidente de la Junta Militar) se comprometiera al retiro de sus fuerzas. El embajador Harry Shlaudeman le aconsejó a Galtieri el retiro unilateral de sus tropas, como un primer paso hacia una solución pacífica y “como un gesto de buena voluntad”. Pero Galtieri le dijo que necesitaba la aprobación de los demás miembros del gobierno.

En los documentos citados queda claro que la Casa Blanca no cumplió un rol de mediador, sino que le interesaba proteger a su aliado político conservador en Londres y de seguridad en la OTAN, aunque secundariamente también quisiera evitar daños en el sistema interamericano y un eventual acuerdo con la Unión Soviética, por lo cual debía mantener un tono balanceado en el trato con la Argentina y con el Reino Unido.

Por último, la directiva número 34 del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, de 14 de mayo de 1982, recuerda que la política de Estados Unidos en la crisis del Atlántico Sur era hacer explícita la posición norteamericana de apoyar al Reino Unido y la determinación de no aceptar el uso ilegal de la fuerza para resolver disputas (*Página 12*, 1 de abril de 2012).

Posteriormente, la nueva democracia argentina tuvo ante sí el desafío de reinsertarse en la arena internacional, privilegiando una política exterior autónoma de las grandes potencias, no alineamiento que debía tener como base una activa presencia en los ámbitos regional y multilateral, con el apoyo de una Europa socialdemócrata supuestamente solidaria con la presidencia de la Unión Cívica

Radical (UCR), partido afiliado a esa corriente de pensamiento, y con un comercio en alza con la URSS que reforzaría la probabilidad de mantener al país en una condición de equidistancia de las grandes potencias.

Sin embargo, la administración de Raúl Alfonsín fue incapaz de desplegar integralmente su programa, aceptando progresivamente las directrices de Washington y de los organismos internacionales de crédito, obligado por un deterioro económico acelerado que desembocó en la hiperinflación, hasta que el Ejecutivo de Carlos Menem adoptó una política de corte neoliberal y se alineó con la Casa Blanca.

Según la hipótesis central de esta investigación, dicho giro se produjo por la mixtura de factores externos e internos, enmarcados en la última etapa de la guerra fría y en un proceso de transición democrática cuyos actores fundamentales fueron los militares, los empresarios, los sindicatos y la oposición política. Estos condicionantes se concretaron haciendo imposible conseguir un mayor espacio de maniobra para enfrentar el pago de la deuda externa, en un contexto de crisis terminal del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), al mismo tiempo que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética entraba en su fase final, debilitando las opciones disponibles para una orientación más independiente de la influencia norteamericana.

Para comprobar estas afirmaciones revisaremos los objetivos centrales de la política exterior del presidente Alfonsín, la manera en que tales propuestas varían en la práctica y los motivos por los cuales se producen los ajustes, todo ello en la perspectiva histórica del tiempo presente o de la historia inmediata<sup>2</sup>, así como de las particularidades latinoamericanas del tercio final de la guerra fría.

## El fin de la Guerra Fría en América Latina

A comienzos de los años setenta el capitalismo mundial sufrió dos importantes crisis que facilitaron las transformaciones que darían origen, en una fase posterior, a la desregulación económica inspirada en los principios del neoliberalismo, a la globalización financiera y a la revolución tecnológica. El fin del patrón dólar-oro, acordado en la Conferencia de Bretton Woods (1944), se precipitó con la inconvertibilidad de la moneda norteamericana, decretada por el presidente Richard Nixon, en 1971. Asimismo, el aumento de los precios del petróleo en 1973 estimuló el remplazo del paradigma tecnológico basado en ese combustible (Pérez, 1986) y llenó el mundo de una inmensa liquidez monetaria, observable en la abundancia de crédito disponible a bajas tasas de interés.

Los efectos del déficit fiscal en Estados Unidos, provenientes de la década de los sesenta, donde proyectos tan ambiciosos como la Nueva Frontera, la Alianza para el Progreso y la Gran Sociedad, así como la guerra de Vietnam, implicaron un

---

<sup>2</sup> El concepto de historia inmediata contradice la vieja aseveración de que es necesario al menos un plazo de 50 años para hacer historia objetiva de un acontecimiento (Alcántara, Paramio, Freidenberg y Déniz, 2006).

desmesurado gasto del gobierno federal, deterioraron la posición de Washington como primera potencia económica y política del planeta, lugar que esa nación había ocupado sin competidores desde el fin de la segunda guerra mundial<sup>3</sup>.

Estas condiciones y la reversión de los factores que facilitaban la liquidez en los mercados de crédito, hacen que los países centrales apliquen estrategias de ajuste macroeconómico y de reestructuración industrial de corte neoliberal (Míguez, 2013: 31-32), destacándose como los primeros en llevar a la práctica esas políticas la Inglaterra de la Primer Ministro Margaret Thatcher (1979-1990) y los Estados Unidos, en el gobierno del Presidente Ronald Reagan (1981-1989).

El desequilibrio estructural de la balanza de pagos que desata una importante alza de las tasas de interés en los países desarrollados y la baja de los precios del petróleo conducen a una reversión de los flujos de capital, por lo que América Latina pasa de receptora neta a la obligación de pagar sus compromisos, desatando la llamada “crisis de la deuda externa”. A principios de los años ochenta, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se convierten en artífices de la negociación de los créditos como intermediarios de los bancos privados, imponiendo planes de ajuste, apertura y desregulación, conocidos como el Consenso de Washington (Williamson, 1989).

Una muestra de ello es el Plan Baker, programa que ofrece préstamos a cambio de disciplina fiscal, reducción del gasto público (en particular el gasto social), aumento de la recaudación tributaria a través de impuestos al consumo, liberalización del sistema financiero y de la tasa de interés, mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio externo mediante baja de aranceles y abolición de requisitos para la importación, facilidades para las inversiones, privatización de empresas, desregulación y ampliación del derecho de propiedad (Míguez, 2013: 35-37).

Las medidas aplicadas por Reagan en su primer mandato provocaron el desplazamiento del eje de la economía norteamericana hacia los sectores de servicios y financiero. A partir de su segundo período, se lanzó una campaña con el objetivo de imponer la privatización en el tercer mundo (Míguez, 2013: 39), además de un incremento del aparato militar, centrado en la Iniciativa de Defensa Estratégica (conocida como “Guerra de las Galaxias”), salto tecnológico sin precedentes, pues

---

<sup>3</sup> Un buen ejemplo de esta situación lo constituye la fundación en 1973 de la Comisión Trilateral, asociación privada promovida por el Chase Manhattan Bank, que reconoce que Estados Unidos ya no era el único líder, por lo que el sistema internacional necesitaba alguna forma de dirigencia compartida. En 1975, publica un informe titulado “la crisis de la democracia”, en el cual critica al Estado de bienestar por ser una especie de camisa de fuerza para la economía y el despliegue de la creatividad, ya que los políticos no pueden rechazar las demandas de los grupos sociales, lo que se refleja en una puja inflacionaria imposible de administrar. Según esta propuesta, para lograr gobernabilidad es necesaria la mercantilización de las prestaciones sociales, la despolitización de la sociedad y la disminución del rol del Estado (Míguez, 2013: 34).

consistía en la construcción de una red de protección contra ataques nucleares, basado en satélites espaciales provistos de armas láser<sup>4</sup>.

Entretanto, concluyeron la mayoría de las dictaduras y regímenes autoritarios de América Latina, dando origen a democracias que Samuel Huntington llamó de la “tercera ola” (1994). Aparte de condiciones propias de cada proceso, resultan fundamentales las causalidades externas que determinaron cada una de estas experiencias, encontrándose entre ellas las ya mencionadas transformaciones estructurales en el capitalismo, los ajustes en la hegemonía de las grandes potencias y los rasgos de la etapa final de la guerra fría.

Los años ochenta fueron una inflexión en la historia latinoamericana comparable al originado por la Gran Depresión de 1929 (Alcántara et al., 2006). Precisamente, la crisis de la deuda terminó con el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, aplicado en la región como réplica a los efectos del crash financiero de los años veinte, que pretendía responder a los límites para el desarrollo de los países más débiles, con políticas basadas en el proteccionismo, el intervencionismo del Estado y la creación de industrias nacionales.

La democratización de casi todas las naciones latinoamericanas en la década de 1980, comenzó a manifestarse como tendencia en las elecciones de la República Dominicana de 1978, aunque la derrota de la Junta militar argentina en la Guerra de las Malvinas marcó el final de la época de los regímenes militares y la paulatina extensión de la democracia por la mayor parte del área (Mira Delli-Zotti, 2010).

Es interesante anotar que los comicios dominicanos perdidos por Joaquín Balaguer, en 1978, muestran relaciones con factores externos que después se repetirían en el resto de la región. Balaguer no pudo manipular los resultados, tal como había sido su práctica habitual, debido al acercamiento a los demócratas norteamericanos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), situación que cambió la actitud de Estados Unidos hacia la isla tras la elección de Jimmy Carter.

Del mismo modo, el ingreso del PRD a la Internacional Socialista le permitió contar con el apoyo de los líderes socialdemócratas europeos y de América Latina, entre los cuales se encontraba el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien llamó por teléfono a Balaguer para amenazarlo con la interrupción de los suministros de petróleo, si trucaba los resultados (Mira Delli-Zotti, 2010).

Luego vinieron una serie de procesos democráticos que entre 1978 y 1990 involucraron a 15 países, desatando transiciones que pueden catalogarse en cuatro tipos, vinculados a la forma en que los regímenes militares dieron paso a la democratización. En primer lugar, nos encontramos con las “transiciones controladas desde arriba” (Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay, Honduras y Chile). En segundo término, aquellas iniciadas por el “colapso” de las dictaduras preexistentes, como la argentina debido a la derrota en las Malvinas. El tercer caso

---

<sup>4</sup> En todo caso, la Iniciativa de Defensa Estratégica nunca fue más allá de una idea, utilizada con mucha habilidad propagandística por el gobierno de Ronald Reagan, sin que haya podido ser concretada hasta ahora, debido sobre todo a su alto costo.

es el de las “transiciones tuteladas desde afuera”, generadas por la intervención internacional (Panamá, Haití, Nicaragua y República Dominicana). Por último, nos encontramos con las “transiciones pactadas” (Guatemala y El Salvador). Además, tenemos a los países que escaparon a esta ola democratizadora, como México, donde un proceso gradual y pactado entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos de la oposición, posibilitó la celebración de elecciones competitivas al Legislativo, en 1997, y a la Presidencia, en 2000 (Alcántara et al., 2006).

No obstante, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua cambió las reglas del juego en que se había desarrollado hasta entonces la dinámica regional, ya que la revolución significó la ruptura de la hegemonía norteamericana (Mira Delli-Zotti, 2010). Pero el posterior acoso y derribo del régimen sandinista con la ayuda significativa de Washington, constituyó un elemento coadyuvante al hundimiento del mito revolucionario iniciado con el triunfo de la Revolución cubana en 1959 (Alcántara et al., 2006).

En 1984, el enfrentamiento bipolar de la guerra fría iniciaba un nuevo ciclo de distensión, verificándose un retorno al diálogo favorecido del lado norteamericano por las necesidades de un año electoral y por el lado ruso, por la necesidad de bloquear la Iniciativa de Defensa Estratégica, imposible de neutralizar por un bloque socialista envuelto en serios problemas económicos y sociales, y por el esfuerzo reformista del nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, aunque no pudo superar el cúmulo de dificultades de toda índole que afectaban al país.

La URSS se desligó poco a poco de la suerte de los regímenes afines en Europa central y oriental, aproximándose en cambio a China y a Europa occidental, junto al despliegue de una ofensiva pacífica en América Latina, en busca de vínculos comerciales e industriales (Míguez, 2013: 40 y 50).

El regreso a la democracia en Argentina y la política exterior del gobierno de Raúl Alfonsín

El propósito de lograr autonomía en el sistema internacional de la guerra fría UCR y del Partido Justicialista, enfrentados en las primeras elecciones democráticas de 1983. Elevado a la categoría de paradigma, se entendía como la capacidad para generar decisiones de manera soberana e independiente de las potencias hegemónicas, lo cual incluía la defensa de los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. En esta perspectiva, la UCR privilegiaba la inserción en el Tercer Mundo, el no alineamiento y el privilegio de las relaciones con Latinoamérica, con un cierto sesgo antinorteamericano, y los peronistas levantaban una tercera posición, distinta al capitalismo y al socialismo, el antimperialismo y la defensa del capital nacional (Míguez, 2013: 54-55).

El juicio y condena a las juntas militares por la violación masiva de los derechos humanos durante la dictadura, dejó pendiente el procesamiento de sus subordinados, problema que se extendió en el tiempo hasta hacer inminente un alzamiento castrense. El presidente Alfonsín decidió, entonces, impulsar la llamada Ley de Punto Final en diciembre de 1986. A pesar de ello, estalló el motín

“carapintada” en la Semana Santa de abril de 1987, encabezado por el teniente coronel Aldo Rico, quien junto a algunos oficiales de diversos puntos del país se autoacuartelaron y exigieron el cambio de toda la cúpula del Ejército. La crisis terminó con el remplazo del alto mando y con la sanción de la Ley de Obediencia Debida, pero las insubordinaciones continuaron hasta el inicio del gobierno de Carlos Menem (*Página 12*, 2007).

El presidente Raúl Alfonsín puso en práctica su primer plan económico, con el objeto de solucionar lo que se percibía como males propios de un mercado interno deprimido. Esta estrategia obedecía a un enfoque keynesiano, cepalino y desarrollista, evidenciado por el control de precios, el incremento del gasto público mediante políticas de corte social como el Plan Alimentario Nacional, los planes de salud y de vivienda, y un aumento de los salarios del 8%. Sin embargo, este paquete de medidas no contó con el respaldo de los grupos de presión interno y externo; en especial, los organismos financieros internacionales, los empresarios y los sindicatos (Escudé y Cisneros, 2000).

La administración radical creía que una renegociación favorable de la deuda externa, la apertura de nuevos mercados y el incremento del precio de los cereales, fortalecido por un fluido comercio con la URSS, permitiría incrementar el gasto público y reactivar la demanda.

En efecto, no obstante la preferencia de las autoridades de Moscú por el candidato peronista a la presidencia, Ítalo Luder<sup>5</sup> (Perosa, 1990; y Gilbert, 1994; citados por Escudé y Cisneros, 2000), el radicalismo definió que no se ejercería ningún tipo de discriminación ideológica en las relaciones comerciales con los países del Este, a pesar de que uno de sus objetivos sería diversificar las exportaciones.

Por el contrario, durante la primera etapa del gobierno de Alfonsín las relaciones con Rusia se vieron afectadas por lo siguiente: a) una baja en el precio de los granos, debido al período de normalización iniciado después de la situación excepcional vivida a principios de la década, producto del embargo norteamericano al comercio con la URSS por la invasión de Afganistán; b) a la prioridad puesta en los vínculos con las socialdemocracias europeas; y c) a la crisis soviética provocada por la muerte sucesiva de sus máximos dirigentes. Debemos apuntar que, en realidad, los empresarios argentinos preferían integrarse al mercado capitalista y la capacidad de compra se encontraba debilitada por la deuda externa, lo que llevaba a privilegiar los vínculos con Washington (Escudé y Cisneros, 2000).

Sin embargo, se produjeron convergencias en el ámbito político. La visita a la Argentina del secretario general de la Cancillería soviética, Yuri Fokin, a fines de julio de 1984, arrojó como resultado un intercambio de opiniones acerca de los temas de la 39ª Asamblea General de la ONU y otros asuntos de interés común, tales como el tema Malvinas, donde el representante de Moscú acusó a Gran Bretaña de adoptar una actitud colonialista y ubicó la disputa en el marco del conflicto Este-Oeste, ya que las autoridades del Kremlin estaban preocupadas

---

<sup>5</sup> Según los informes de la Embajada soviética, esta preferencia se debía al buen recuerdo de los acuerdos económicos firmados durante los gobiernos peronistas de la década de 1970.

por la instalación en el Atlántico Sur de armas avanzadas. Al mismo tiempo, un artículo publicado en la prensa rusa acusó a Estados Unidos de utilizar al Fondo Monetario Internacional para ejercer presión política sobre la gestión de Alfonsín, respaldando la actitud de Buenos Aires al resistir el apremio norteamericano y de los bancos acreedores (Escudé y Cisneros, 2000).

Argentina quería reinsertarse en el mundo mediante un esquema de diversificación de puntos de sustento o de pivote, en que los gobiernos europeos, en especial los socialdemócratas afines al radicalismo, y los países de América Latina, actuarían como factores de resguardo para la transición democrática, con autonomía y protagonismo en el proceso de integración regional (Míguez, 2013: 57 y 59).

A esta política se le llamó “principista”, caracterizándose, además, por la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias, la solución al conflicto del canal Beagle con Chile y una “relación madura” con Estados Unidos. La idea era utilizar los márgenes de independencia necesarios para llevar adelante una gestión de alto perfil, que facilitara transformarse en una “potencia moral”, aspiraciones que se tradujeron en una participación activa en los esfuerzos de paz en Centroamérica, tales como el apoyo al Grupo Contadora, el rechazo al embargo estadounidense a Nicaragua y la promoción de la negociación entre sandinistas y contras (Míguez, 2013: 58).

También se desarrolló una dinámica inserción multilateral, conocida como la “política de los veinte frentes”, que debería proveer un soporte diversificado y una relación con la Casa Blanca que admitiera “convergencias esenciales” (tales como las coincidencias sobre el régimen democrático, la libertad y el pluralismo) y, al mismo tiempo, “disensos metodológicos” vinculados a la forma de lograr esos valores compartidos (Russell, 1991b: 17; citado por Míguez, 2013: 59).

Buenos Aires aspiraba a mantener por separado los temas políticos y diplomáticos que causaban mayores desacuerdos con Washington, principalmente las iniciativas de paz en Centroamérica, la negativa a firmar el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares (TNP), ratificar el Tratado de Tlatelolco y desmantelar el proyecto misilístico Cóndor II (Míguez, 2013: 59).

La administración alfonsinista recibió como herencia del régimen autoritario los programas misilísticos Cóndor I y Cóndor II. El Cóndor II era un misil balístico de alrededor de 1.000 kilómetros de alcance, capaz de alcanzar las islas Malvinas o Santiago de Chile. Tras la llegada de la democracia, este proyecto secreto no fue interrumpido porque se estimaba que la posesión de estos misiles podía representar un instrumento de disuasión en caso de un eventual ataque externo y ser una carta de negociación más en la disputa con Gran Bretaña. Asimismo, representaba un buen negocio a corto plazo y constituía una especie de compensación política a la Fuerza Aérea, arma que era más democrática y menos conflictiva respecto del poder civil, la que menos se involucró la “guerra sucia” y la que contaba con mejor imagen dentro y fuera del ámbito castrense desde la guerra de Malvinas (Escudé y Cisneros, 2000).

Un documento desclasificado indica que el gobierno de Argentina alegaba que el proyecto Cóndor II era un mero programa pacífico destinado a los lanzamientos espaciales, sin uso militar. Sin embargo, Estados Unidos no coincidía con esta postura, puesto que la Argentina no tenía un plan espacial en marcha. Por otro lado, Washington estaba disconforme por el apoyo de países como Egipto e Irak al plan Cóndor, ya que la exportación de misiles a Medio Oriente desestabilizaría el balance de seguridad de una región tradicionalmente tensa. Además, Estados Unidos había reclamado a los países europeos que detuvieran la transferencia de tecnología vinculada al programa, y se cree que estos pedidos habrían contribuido al estancamiento del mismo. También se informa que el misil Cóndor podía transportar ojivas nucleares y que toda la información recolectada indicaba que se trataba de un programa militar. Estados Unidos y la Unión Soviética habían firmado un tratado que eliminaba este tipo de misiles, y no beneficiaba la seguridad de nadie que ellos volvieran a emerger en otras partes del mundo. Finalmente, se establece que había cooperación espacial considerable entre Washington y Argentina, y que ella debería continuar y expandirse (Documento sobre el misil Cóndor II, 1989).

Incluso, un funcionario estadounidense se mostró sorprendido de que el embajador Richard T. Kennedy haya dado su aprobación a los argentinos durante su visita a Buenos Aires, ya que existían informes sobre la cooperación argentina con Libia en el proyecto del misil Cóndor. Otro funcionario señaló que Argentina comprendía los peligros de proveer asistencia nuclear sensible a Irak e Irán, y que se esperaba que fueran cuidadosos en esta cuestión. También la CIA hace referencia a una “empresa cooperativa” entre Argentina, Egipto e Irak. Se señala que en 1984, Irak, restringido por un desarrollo misilístico y una producción de infraestructura limitados y la carga financiera en que incurrió durante la guerra con Irán, se centró en el financiamiento a Argentina e Irak para el desarrollo del programa del misil Cóndor II. Se cree que Egipto e Irak otorgaron financiamiento al programa argentino a cambio de los primeros misiles a ser producidos y que adquirió los materiales necesarios para la producción del Cóndor II en Irak. Por otra parte, se indica que el programa Cóndor II enfrentó dificultades a mediados de 1989, debido a presiones internacionales, al régimen de control de la tecnología de misiles (MTCR) y a dificultades técnicas, y esto llevó a un estancamiento tanto en Argentina como en Egipto (Documentos sobre riesgos de proliferación nuclear y desarrollos misilísticos iraquíes, 1990).

Sobre la crisis centroamericana podemos mencionar que, mientras la administración Reagan asignaba la responsabilidad de todos los conflictos globales y regionales a la amenaza de la URSS y de Cuba, Argentina se negó a reconocer el eje Este-Oeste como único modelo de referencia, oponiéndose a la intervención norteamericana en América Central. Además, existía la necesidad de diferenciarse del apoyo que el régimen militar le había proporcionado a los “contras” y se trataba de evitar que la lucha ideológica adquiriera una proyección que afectara a las aún frágiles democracias de la región.

Sin embargo, las dificultades económicas, la difícil renegociación de la deuda externa y el diferendo con Gran Bretaña sobre las islas Malvinas, hicieron que la Cancillería argentina moderara su posición con respecto a Centroamérica, adhiriendo a la propuesta de paz presentada por Ronald Reagan, en abril de 1985, y respondiendo en forma muy débil al bloqueo económico dispuesto por Washington contra Nicaragua en mayo del mismo año (Escudé y Cisneros, 2000).

En cuanto a la política nuclear, el gobierno de Alfonsín continuó la misma senda de sus antecesores, transformándose en uno de los asuntos más controversiales de la agenda con Estados Unidos. Así, el Ejecutivo no consideró la ratificación del tratado de no proliferación, por suponer que era discriminatorio. De igual manera, debían tomarse en cuenta las particularidades del tratado de Tlatelolco en relación a aquel, sin que fuera considerado como una versión regional del tratado de no proliferación. Además, el gobierno argentino deseaba verificar si habían existido violaciones al Protocolo II de Tlatelolco durante la guerra de las Malvinas. Tal posición tenía su origen en argumentos nacionalistas contrarios a contraer compromisos en estos temas, pues tenían un carácter discriminatorio y atentaban contra la aspiración de poseer un estatus de independencia nuclear. A pesar de la negativa, Argentina realizó una serie de gestos, cuyos fines eran marcar diferencias con la dictadura, y alejar posibles temores de Washington y de la comunidad internacional (Escudé y Cisneros, 2000).

Otro documento desclasificado nos permite conocer un informe de la CIA donde aparece que el presidente Alfonsín había tomado medidas para ubicar al programa nuclear argentino bajo control civil y para limitar la influencia militar sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Estados Unidos creía en la veracidad de las declaraciones hechas a funcionarios norteamericanos según la cual Argentina continuaría su trabajo en el desarrollo de tecnologías necesarias para completar el ciclo nuclear. La Agencia agrega que el margen de maniobra de Alfonsín en este tema y en otros que despiertan un amplio interés nacionalista, estaba limitado por su tenue base política, la fragilidad de las instituciones democráticas argentinas, y la presión ejercida por otras crisis que enfrentaba su administración. Estados Unidos consideraba que cualquier esfuerzo hecho por Alfonsín para acceder a las presiones internacionales respecto de la no proliferación serían bloqueadas efectivamente por las críticas internas según las cuales estaría sacrificando la independencia nuclear de Argentina (Documento política nuclear argentina bajo el gobierno de Alfonsín, 1984).

Tampoco la reanudación de los vínculos militares entre Buenos Aires y la Casa Blanca estuvo exenta de dificultades. Los militares argentinos no le perdonaron a Washington el respaldo a Londres en la guerra de Malvinas y para el Pentágono los argentinos eran una fuente de incertidumbre. El primer paso en dicha normalización ocurrió en diciembre de 1983, cuando Estados Unidos anunció que levantaría el embargo que pesaba sobre la asistencia militar a la Argentina desde la enmienda Humphrey-Kennedy de 1977, pero la oposición británica y la falta de una buena relación entre las autoridades de la Argentina, fueron factores decisivos

que evitaron que la medida se implementara hasta el siguiente gobierno de Carlos Menem (Escudé y Cisneros, 2000).

El temor de Washington a la pérdida de la estabilidad democrática en Argentina motivó una reactivación de los contactos a nivel de Fuerzas Armadas y funcionarios de Defensa de ambos países tendientes a lograr el reequipamiento militar argentino. Pero la condición era terminar con el estado de beligerancia con Gran Bretaña y solo pudo concretarse alguna transacción en 1989, con la firma de un préstamo norteamericano para la compra de repuestos para vehículos blindados y helicópteros por valor de más de 13 millones de dólares (Escudé y Cisneros, 2000).

El tema que ofreció mayor dificultad para llegar a acuerdo fue el de la deuda externa. Alfonsín defendió la necesidad de politizarlo, en tanto las políticas de ajuste “ortodoxo” recomendadas por los organismos internacionales de crédito debilitarían a las nacientes democracias de la región, demasiado vulnerables para soportar los efectos sociales de las medidas de austeridad (Escudé y Cisneros, 2000). Sin embargo, criterios como la distinción entre la deuda externa legítima y otra ilegítima contraída por el régimen militar, y el tratamiento conjunto con otras naciones de la región, fueron rechazados por la Casa Blanca, puesto que el problema era financiero y debía tratarse con cada país por separado (Míguez, 2013: 60).

Tampoco fue aceptado destinar solo un porcentaje de las exportaciones para el pago de la deuda; la formación del Grupo de Cartagena, que procuraba convertirse en un club de deudores, no logró que las naciones participantes (Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Perú y Argentina) se comprometieran más allá de los discursos; los gobiernos europeos de corte socialdemócrata no concretaron el apoyo comprometido<sup>6</sup>; y el intercambio comercial con la Urss fue exitoso solo hasta 1986, sin que pudieran cumplirse las metas establecidas en los nuevos convenios suscritos en enero de ese año (Míguez, 2013: 61 y 63).

La exagerada confianza en el poder simbólico de la naciente democracia, factor que para algunos autores componía una fuerte dosis de idealismo en la política exterior (Escudé y Cisneros, 2000), no se tradujo en ayudas económicas concretas por parte de los países desarrollados, debido esencialmente a la falta de un programa económico que generara confianza en los inversores externos.

El fracaso de los supuestos con que el gobierno de Alfonsín llevó adelante su desempeño económico internacional, obligó a Argentina a abandonar la distinción entre deuda legítima e ilegítima, operando un “giro realista” que acercó al país al FMI, aceptando los planes de ajuste para el equilibrio de las cuentas públicas y la prioridad en la lucha contra la inflación, que esa institución crediticia exigía a cambio del refinanciamiento y del ingreso de capitales (Míguez, 2013: 64).

---

<sup>6</sup> Una de las razones que pueden explicar esta actitud es la falta de identificación del conjunto de la UCR con la Internacional Socialdemócrata, puesto que solo la corriente alfonsinista del partido (llamada Renovación y Cambio) era afín a esos postulados.

No obstante, la administración radical insistió en fórmulas heterodoxas, como el “ajuste positivo”, que pretendía recuperar el crecimiento a través del fomento de las exportaciones y de la inversión, renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, y controlar los salarios, mediante una relación con el tipo de cambio que disminuyera la inflación y aumentara los saldos exportables. Pero el FMI vetó la propuesta, por lo que se profundizó el ajuste, se reconoció la necesidad de reformar el Estado y privatizar empresas públicas, se verificó el abandono del énfasis en la política multilateral y se anunció un cambio de prioridades, pasando al primer lugar los vínculos con Washington, seguido por América Latina, Europa occidental y los países en desarrollo (Míguez, 2013: 66-68).

En 1987, el radicalismo perdió las elecciones legislativas y con ellas se disolvieron las posibilidades de concretar las reformas previstas. Al año siguiente continuaron las negociaciones de créditos directos y de los bancos privados, gestiones que contaron con el apoyo de Washington, pues este quería evitar cualquier crisis en las relaciones financieras internacionales que pudiera entorpecer el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre y le preocupaba la posibilidad de que Argentina cayera en una situación de hiperinflación.

A pesar de todo, en la primera mitad de 1988 se había producido una aceleración inflacionaria que intentó ser revertida con el Programa para la Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido, más conocido como Plan Primavera. Este plan implicaba un congelamiento general de precios, tarifas, salarios estatales y tipo de cambio, que no resultó por la cerrada oposición de la Sociedad Rural, la actitud especulativa y de profunda desconfianza de los inversores, los empresarios y demás agentes económicos, y la suspensión del apoyo externo por parte del Banco Mundial (Escudé y Cisneros, 2000).

Tras el fracaso del Plan Primavera, se desató la hiperinflación, la estampida del dólar, la pérdida de reservas del Banco Central, los saqueos a supermercados y la sensación general de inseguridad. El presidente Alfonsín se vio obligado a hacer entrega del mando presidencial anticipadamente al sucesor electo, Carlos Menem.

En suma, la política exterior argentina tuvo que adaptarse a un debilitamiento relevante de los márgenes de autonomía utilizables, mientras se diluía la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista coincidieron en anotar en sus respectivas plataformas políticas de 1988 un vuelco hacia las políticas de apertura económica y a una vinculación más cercana con la Casa Blanca, mientras empeoraba la situación económica interna y la Unión Soviética entraba en una crisis terminal (Míguez, 2013: 68 y 81).

## Conclusión

Con una guerra fría en su última década de existencia y un sistema capitalista sujeto a profundas transformaciones como telón de fondo, es relativamente sencillo pensar que las aspiraciones de autonomía del primer gobierno de la recién recuperada democracia argentina fueron ahogadas por las tendencias macro y por los intereses hegemónicos de Estados Unidos, implicados en una estrategia de

recuperación de espacios que se percibían como perdidos en la administración Carter, a los cuales no convenía el éxito de la política exterior del radicalismo y que, por el debilitamiento del polo contrario en el conflicto Este-Oeste, tenían el camino despejado para alcanzar lo esencial de sus propósitos.

El escenario donde se desarrolla esta visión, de suyo conspirativa, es la América Latina de principios de los años ochenta, con procesos internos que van a dar lugar o que deberán sostener un panorama inédito colmado de nuevas democracias, amenazadas por la crisis de un modelo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones, la necesidad de mantener delicados equilibrios políticos y sociales, unas Fuerzas Armadas reticentes a volver a sus actividades profesionales y la pesada carga de una deuda externa de la cual muchas veces no son responsables.

La evaluación correcta de estos determinantes, así como ponderar de manera cabal cuánto se debe a qué, es fundamental para apreciar en su justa medida los factores que animan la experiencia que hemos analizado. Por eso, y con las limitantes propias de un trabajo como este, nos parece que la suerte de la política exterior del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, aparece más como el resultado de la proyección internacional de las condiciones propias del proceso democrático interno, sin que el enfrentamiento con la administración norteamericana, el devenir del sistema internacional y los elementos constitutivos del contexto regional, importantes aunque no excluyentes, puedan alejarse o diferenciarse del conjunto de rasgos que definen la época en que nos situamos.

En una primera fase, la política exterior de la administración radical se caracterizó por una mayor confrontación con Estados Unidos en variados ámbitos de la agenda regional. No obstante, tal situación se mantuvo en el esquema básico de la relación bilateral, sin afectar la pertenencia del país al bloque capitalista occidental y a los valores de la democracia, compartidos por un Ejecutivo que había combatido a la dictadura, precisamente en defensa de aquellos principios.

Es cierto que con posterioridad prevalecieron las obligaciones derivadas de la renegociación de la deuda externa, concretándose en un “giro realista” que llevó a mejorar los vínculos y aceptar las recomendaciones, tanto de Washington como de las instituciones internacionales de crédito.

Pero el fruto de ese cambio de óptica, que en economía se llamó “plan Austral”, no pudo aplicarse con éxito, entre otras razones, por el insuficiente respaldo de los empresarios, y el rechazo de la oposición, de los sindicatos y de una fracción del oficialismo. Por su parte, el legado cultural e ideológico nacionalista y reivindicativo de una “Argentina potencia”, todavía vigente en esos años, impidió la puesta en práctica de una mirada más realista o pragmática en el plano internacional.

Esta suerte de paradigma, anclado en la historia del siglo XX, solo se vio alterado en la política vecinal, con la firma del tratado de paz con Chile en 1984 y el inicio de la integración con Brasil en 1985, conducta que podría deberse más bien a la necesidad de afianzar la paz en las fronteras, restando poder a las Fuerzas Armadas, y a la postura latinoamericanista del gobierno.

Puestos sobre el entramado teórico de la historia del presente, esta investigación ha pretendido examinar de manera general un caso de política exterior que ilustra ejemplarmente lo que fue la inserción de la región latinoamericana en el mundo, al final del sistema construido alrededor de la pugna entre dos superpotencias, que representaban no solo perspectivas diversas de poder, sino que concepciones contrapuestas sobre la vida en sociedad.

Sin embargo, durante ciertos períodos aquella división se hizo más tenue y los márgenes de independencia de las naciones aumentaron o, como en este caso, disminuyeron debido a que uno de los actores se encontraba en un proceso que terminó por hacerlo desaparecer. A pesar de ello, persiste la vinculación entre los aspectos internos y externos, ya que el ascendiente de la Unión Soviética en la región no era tan directo y el dominio norteamericano era fuerte en su entorno geográfico más cercano.

Quizá con la excepción de Cuba, Moscú se abstuvo de involucrarse en un área que consideraba perteneciente a Washington y la Casa Blanca ejerció su poder de manera indirecta, a veces incluso contradictoria, en relación a un país distante como Argentina. Por cierto, esto no significa que las autoridades radicales fracasaran exclusivamente por razones domésticas, pero la complejidad de los problemas a resolver y la falta de consenso entre las fuerzas políticas nacionales, impidieron que Argentina se reencontrara exitosamente con el mundo, ni siquiera cuando el gobierno siguiente aceptó las reglas del juego del capitalismo financiero, neoliberal y desregulado.

## Referencias

- ALCÁNTARA, M., PARAMIO, L., FREIDENBERG, F. y DÉNIZ, J. (2006). Reformas económicas y consolidación democrática, Historia contemporánea de América Latina (volumen VI 1980-2006). Madrid, España: Síntesis. Reseña de Artaza Montero, M. (2008), en *Revista Araucaria*, Año 10, n° 19.
- ARNSON, C. y TARACIUK, T. (2004). Introducción. En C.J. ARNSON, T. TARACIUK, J. DINGES, C. OSORIO, H. VERBITSKY, A. ARMONY, F.A. HARRIS, A. COLOMBO SIERRA, R. RUSSELL, M. FALCOFF, D. TUSSIE (Comps.). *Relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Pasado y presente*. Washington: CELS-Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program.
- CIA (27/07/1984). Política nuclear argentina bajo el gobierno de Alfonsín. Informe 19840727.
- CIA (29/05/1990). Desarrollos misilísticos iraquíes. Informe 19900529.
- DEPARTAMENTO DE ESTADO (25/05/1989). Contacto con los argentinos sobre el Cóndor II. De Allen Holmes a Michael G. Kozak, Subsecretaría de Asuntos Interamericanos, documento 19890525.
- DEPARTAMENTO DE ESTADO (mayo de 1990). El Dr. Gary Samore menciona los riesgos de la proliferación nuclear y reuniones con el gobierno de Israel. De Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv a Departamento de Estado, documento 19900500.

- DINGES, J. (2004). Luz verde y luz roja: Las políticas sobre derechos humanos de Henry Kissinger durante los “años Cóndor”. En C. J. ARNSON, T. TARACIUUK, J. DINGES, C. OSORIO, H. VERBITSKY, A. ARMONY, F. A. HARRIS, A. COLOMBO SIERRA, R. RUSSELL, M. FALCOFF, D. TUSSIE (Comps.). *Relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Pasado y Presente*. Washington: CELS-Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program.
- Documento (4 de mayo de 1977). Colección desclasificada sobre Argentina, “Human Rights: The Key to Our Relations”.
- ESCUDE, C. y CISNEROS, A. (2000). Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas. CARI-CEPE. <http://www.argentina-rree.com/historia.htm>
- FOIA (2006). Reunión de personal de alto nivel con el secretario de Estado Henry Kissinger, pp. 1, 19-23, 26 de marzo de 1976.
- GILBERT, I. (1994). El oro de Moscú. La historia secreta de las relaciones argentino-soviéticas, Buenos Aires, Planeta, pp. 384-385. En C. ESCUDÉ y A. CISNEROS (2000), *Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas*. Buenos Aires: CARI-CEPE. <http://www.argentina-rree.com/historia.htm>
- GRANOVSKY, M. (1 de abril de 2012). Los documentos secretos de los Estados Unidos durante la guerra de Malvinas. Diario *Página 12*, Buenos Aires, Argentina.
- HUNTINGTON, S. (1994). *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Buenos Aires: Paidós.
- MÍGUEZ, M. (2013). *Los partidos políticos y la política exterior argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- MIRA DELLI-ZOTTI, G. (2010). Transiciones a la democracia y democratización en América Latina: un análisis desde la historia del presente. XIV Encuentro de latinoamericanistas españoles, Universidad de Salamanca, España.
- OSORIO, C. (2004). La política exterior de la administración Carter. En C. J. ARNSON, T. TARACIUUK, J. DINGES, C. OSORIO, H. VERBITSKY, A. ARMONY, F. A. HARRIS, A. COLOMBO SIERRA, R. RUSSELL, M. FALCOFF, D. TUSSIE (Comps.). *Relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Pasado y presente*. Washington: CELS-Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American Program.
- PÉREZ, C. (1986). Las nuevas tecnologías: Una visión de conjunto. En C. OMINAMI (Ed.), *La tercera revolución industrial. Impactos internacionales del actual viraje tecnológico*. Buenos Aires: RIAL-GEL.
- PEROSA, H. (1990). Las relaciones argentino-soviéticas contemporáneas/2. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, Argentina, 156-157. En ESCUDÉ, C. y CISNEROS, A. (2000), *Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas*. Buenos Aires: CARI-CEPE. <http://www.argentina-rree.com/historia.htm>
- RUSSELL, R. (1991). Argentina y Estados Unidos: la política del jugo de limón. En *Colombia Internacional*, n° 14, Universidad de los Andes, Bogotá. Citado por MÍGUEZ, M. (2013). *Los partidos políticos y la política exterior argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- VALES, L. (15 de abril de 2007). Los carapintada veinte años después. *Página 12*. Buenos Aires, Argentina.
- WILLIAMSON, J. (1989). What Washington means by policy reform. En J. WILLIAMSON (Ed.), *Latin American readjustment: how much has happened*. Washington DC: Institute for International Economics.

